

El pulso del trasvase

PP y Ferraz negocian que el Estatuto manchego aluda a la caducidad del Tajo-Segura en 2015 con una fórmula que les permita salvar una batalla judicial en el Constitucional

© 11:09 ☆☆☆☆☆



La negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluye la polémica cláusula de caducidad del Tajo-Segura en 2015, entra en su recta final. En febrero, el documento debe iniciar su periplo por la Comisión Constitucional antes de que se debata en pleno. Y, hoy por hoy, la intención de las direcciones estatales de PP y PSOE es mantener la alusión al final de la conducción, lo que podría abrir una durísima batalla judicial.

P. ROSTOLL Minutos antes de que el Congreso aprobara el pasado 14 de octubre admitir a trámite el Estatuto de Castilla-La Mancha y por extensión la polémica cláusula que propone acabar con el Tajo-Segura en 2015, un veterano dirigente del PP

recurría a María Teresa Fernández de la Vega para asegurarse de que los socialistas tenían controlados a sus diputados y de que la votación iba a resultar una balsa de aceite a pesar de los recelos de valencianos y murcianos. La vicepresidenta replicó: "Nosotros no tendremos ningún problema. Vosotros dos bajas". Así ocurrió. Poco después, dos parlamentarios murcianos del PP rompían la disciplina de voto y se oponían a la tramitación del polémico documento.

Era tan sólo el primer capítulo de un pulso que en febrero, a la vuelta de las vacaciones en la Carrera de San Jerónimo, vivirá su momento culminante. Los negociadores del PP y del PSOE -los dos partidos que pactaron iniciar la reforma estatutaria en las Cortes de Castilla-La Mancha- tendrán que empezar a perfilar en el Congreso cómo resuelven el espinoso asunto de la caducidad del Tajo-Segura y, conforme a eso, redactar una fórmula que les permita salvar el escollo de la batalla judicial que le espera, con mucha probabilidad, al documento en el Tribunal Constitucional tras la discusión política y su tramitación parlamentaria.

Y todo ello con dos condicionantes que penden como una espada de Damocles y que amenazan el resultado final de la negociación. Primero, ni PP ni PSOE -eso es una opinión generalizada entre las fuentes consultadas- están en condiciones de dejar en mal lugar ni a Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy; ni tampoco a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha y responsable del consejo territorial del PSOE. Y segundo, cualquier texto que ponga sobre la mesa la alusión a la caducidad del Tajo-Segura puede acabar levantando en armas a la Comunidad y Murcia, ahora graneros de voto del PP y con dos organizaciones socialistas -las que dirigen Jorge Alarte y Pedro Saura- que deambulan desde hace lustros en un desierto que parece no acabar nunca y que necesitan de golpes de efecto para intentar enderezar el rumbo.

Con ese escenario tan complicado, socialistas y populares -Ramón Jáuregui y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente- llevan semanas hablando sobre la base de un documento -se han barajado hasta cinco redacciones distintas- que recoja la petición de Barreda y Cospedal sobre el cierre del Tajo-Segura, una conducción vital para Alicante, pero rebajando su valor jurídico. Más o menos, el texto que en el que se está trabajando aludiría al "deseo" o "aspiración" de la Junta de Castilla-La Mancha de que caduque el trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Esa referencia se incluiría, de acuerdo con las fuentes consultadas, en una disposición transitoria o en la exposición de motivos. Esa es la propuesta que, en estos momentos, hay sobre mesa. La referencia tendría poco valor legal pero mantendría viva la llama del debate. La visita de José Blanco, vicesecretario del PSOE, a la Comunidad no ha contribuido esta semana a despejar ningún temor. Todo lo contrario. Blanco resta importancia a la fecha de caducidad y habla de "otras soluciones": trasvasar desde Extremadura, una opción que no es garantía de nada. ¿Una vez aprobada la cláusula de caducidad cuándo llegaría el agua? Nadie lo sabe.



Barredasaluda a María Dolores de Cospedal durante un acto reciente en Toledo, en una imagen de archivo EFE

El primero en reaccionar fue Jorge Alarte, responsable de los socialistas valencianos. Tras reunirse con Camps anunció que el PSPV -una intención que ratificó ante el propio Blanco- presentará un recurso judicial para defender el trasvase en el Constitucional, un giro de 180 grados a la política hídrica de los socialistas valencianos. La firmeza de Alarte, que afronta la primera prueba de fuego sobre su capacidad de liderazgo, abre, así, otro condicionante más que los negociadores también tienen en cuenta: que la fórmula elegida se ajuste a la legalidad -el próximo paso del Estatuto manchego será la comisión Constitucional- para esquivar el órdago jurídico del dirigente del PSPV.

Camps vuelve a mirar al eje
con Valcárcel

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por primera vez en mucho tiempo jugando en campo contrario por la firmeza con la que, de momento, se ha mostrado Alarte sobre este asunto, todavía no ha definido su postura. En círculos reducidos, habla de provocar una rebelión de diputados del PPCV si la alusión a la caducidad del trasvase se mantiene. Sería otro desencuentro más con Génova tras las diferencias evidentes sobre el modelo de financiación. Necesitado de marcar una posición, Camps volverá mañana a reunirse con Valcárcel, su mayor aliado hasta que hace tres meses el jefe del Consell optó por mirar hacia Esperanza Aguirre. Obligado por las circunstancias, Francisco Camps vuelve a mirar hacia Murcia.